

1998 Y 1999: RESUMEN Y PERSPECTIVAS PARA CHIAPAS

GUSTAVO CASTRO SOTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 15 DE ENERO DE 1998

1998: Podemos afirmar que este año ha sido el más difícil para Chiapas desde que comenzó el conflicto armado en enero de 1994. Las catástrofes naturales, políticas y sociales devastaron los intentos de democracia y de búsquedas por la paz.

La coyuntura cambia cuando se modifica la correlación de fuerzas, gracias a la alianza entre distintos actores que logran con más poder (que cruza los niveles económico, político, ideológico y militar), que sus intereses o proyectos rijan el destino de la nación o de la mayoría de los mexicanos. Y la pregunta crucial para 1998 es esta: ¿cambió la coyuntura?

En el **ámbito económico**, el país cayó en la peor crisis económica que haya tenido. Cayó el precio del petróleo hasta en menos de 7 dólares por barril, más del 50% y más barato que la Coca Cola; la inflación llegó hasta el 18%, el peso se devaluó más del 23%, subieron los precios de la gasolina y diesel, se liberó el precio de la leche y de la tortilla al cumplirse los 5 años de la firma del Tratado de Libre Comercio (NAFTA) que le ahorraría al gobierno alrededor de 6 mil millones de pesos que destinaba a los pobres, y otros aumentos a los precios de la canasta básica. Sin embargo, el pago de la deuda externa creció en el presupuesto. Además, se recortó tres veces el presupuesto al país que afectó a los programas de combate a la pobreza, por lo que los índices de pobreza y marginación se agudizaron. El FMI, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales aceptaron esta realidad catastrófica para el país.

En 1998 se registró el fraude más grande y escandaloso: el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), cuyos casi 70 mil millones de dólares sumieron a la sociedad en una fuerte discusión, ya que el Presidente Zedillo pidió que el pueblo, como deuda pública, pagara el fraude que enriqueció a empresarios, banqueros y al mismo partido oficial y al actual presidente de la República por los supuestos desvíos de dichos fondos a las campañas políticas de 1994. Por si fuera poco, se legaliza el anatocismo (pago de intereses sobre intereses) que golpea a miles de deudores de la banca. Otros fraudes escandalosos dan pruebas de a quienes se castigan y a quienes beneficia el proyecto económico. Ángel Isidoro Rodríguez, Cabal Peniche, Raúl Salinas de Gortari, la Operación Casa Blanca orquestada por los EEUU, el fraude de Aeroméxico para el apoyo a las campañas del partido oficial fueron, entre otros, los casos que vimos durante 1998.

Paralelamente, en Chiapas se anunció la peor catástrofe hasta el momento causada por los incendios que llegaron a estimarse en más de 200 mil hectáreas quemadas durante el primer semestre del año. Esto dejó saldos alarmantes en la ecología y la producción agropecuaria que, con otros incendios en el país, obligó a importar alrededor de 15 millones de toneladas de granos básicos creando un déficit en la balanza agropecuaria y aceleró la importación de granos básicos favoreciendo a nuestros socios del norte. Dos meses después, en el mes de septiembre, se paga la factura de la deforestación de dichos incendios, de la tala de árboles inmoderados y, para otros, de los incendios provocados

por los paramilitares y militares con el fin de arrinconar más al EZLN, y causan la peor catástrofe natural que se registrara desde el sismo en la Ciudad México en 1985, como dijera el propio Presidente Zedillo, con lluvias e inundaciones que acabaron con la infraestructura de comunicaciones (puentes, carreteras, caminos, vías ferroviarias, etc.), enlutaron a miles de familias que vieron sepultados sus muertos y miles de hogares bajo el lodo. Nuevamente, más de 100 miles de hectáreas se perdieron bajo el lodo, así como mucha infraestructura social (escuelas, clínicas, canchas deportivas). Aunado a esto, el comercio anunció un drástico cierre de empresas y aumentaron los deudores. De este modo, la economía de Chiapas se vio colapsada, arruinada, arrasada y retrasada en décadas en tan sólo un año. Retroceso que costará décadas recuperar.

Todos vimos y vivimos esta tragedia económica de Chiapas y el país, menos el gobierno que, al final del año, publicó ampliamente por los medios de comunicación que el país ha visto crecer su economía y que está más fortalecida que las potencias más fuertes del orbe: Canadá, EEUU, Japón y Corea. Sin embargo, la pérdida de credibilidad sobre el régimen actual y su política económica sigue el curso más acelerado que los pocos días para el año 2000. El reto del gobierno para el fin del milenio no es mejorar las condiciones de vida, ya que el proyecto neoliberal y la globalización es intrínsecamente excluyente y empobrecedor como ya lo estamos viviendo, además de que la política económica y los recortes presupuestales continúan, sino si logra convencer a la población del virtual desarrollo del que gozamos, si logra repetir la mentira para convertirla en verdad a la hora de la votación por la elección de un nuevo presidente, si logra imponerse nuevamente por el fraude electoral o convencer en el abstencionismo ante el miedo a lo nuevo, a un nuevo gobierno, a un nuevo milenio; o imponerse por la fuerza ante el descontento social que rebasa ya la esfera de los más de 40 millones de pobres en el país.

Así, los partidos de oposición (PRD, PT, PVEM) no lograron revertir el proyecto económico ante las alianzas del PRI y el PAN que aprobaron su iniciativa sobre el FOBAPROA, la ley de ingresos y el presupuesto para 1999. La batalla económica la perdieron en el Congreso de la Unión y en el Congreso Local. Sin embargo, la población del país y de Chiapas ganó en consciencia. El debate sobre los fraudes, el FOBAPROA y otros acontecimientos en Chiapas, evidenciaron el doble lenguaje gubernamental.

En el **ámbito político**, la masacre de Acteal produce un cambio de gabinete en el gobierno federal con el arribo del tercer secretario de gobierno en el presente sexenio, entre otros funcionarios, y se impone nuevamente a otro gobernador interino en Chiapas, que supliera al interino del interino, y con él arriban nuevos secretarios de estado después de la renuncia del anterior gabinete acusado de estar involucrado en la masacre. Este nuevo gobernador manipula el llamado Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Chiapas de donde pretende legitimar sus acciones de gobierno que en realidad serían las directrices del grupo de asesores del Presidente Zedillo. De cara a imponerse en el terreno político, luego de ser repudiada su imposición, se lanza fieramente contra toda disidencia y oposición a su gobierno. Las organizaciones sociales sintieron el yugo del gobernador interino Albores: a principios del año realiza el operativo policiaco militar en San Cristóbal contra líderes de organizaciones indígenas evangélicas y encarcela a tres de sus principales dirigentes; en enero es asesinado el líder campesino Rubicel Gamboa y una indígena en Ocosingo es asesinada por las fuerzas policiacas durante una marcha campesina. Contra el EZLN, entre abril y junio,

de la mano con las fuerzas militares, realiza los operativos en el Municipio Autónomo "Flores Magón" en la comunidad de Taniperla, en el de "Tierra y Libertad", Nicolás Ruiz, 10 de Abril en Altamirano y termina con otra matanza de indígenas del EZLN en el municipio San Juan de la Libertad, en la comunidad de Unión Progreso y Chavajeval.

En este período el gobierno federal quiso destrabar el diálogo de paz encausando su iniciativa unilateral sobre Derechos y Cultura Indígena al Congreso de la Unión lo que suscitó todo tipo de reacciones a esta medida. Por fin, el EZLN rompe el silencio que enloqueció al gobierno federal y lanza la V Declaración de la Selva Lacandona, que pone en marcha una gran movilización nacional para que, por medio de una Consulta, el pueblo de México decida si considera como válida o no la propuesta de Ley original que elaborara la COCOPA sobre Derechos y Cultura Indígena a solicitud de las dos partes. El EZLN sale nuevamente a la luz pública haciendo todo tipo de declaraciones y diagnósticos sobre el rumbo del país y de las acciones de los gobiernos federal y estatal en Chiapas. Curiosamente, fue el año en que más visitas presidenciales se han registrado en el estado.

Durante este año, pese a las iniciativas de paz de diversos actores políticos para destrabar el diálogo y la negociación, entre ellas del PRD, Manuel Camacho Solís, la COCOPA y la CONAI, el grupo de Creadores, Académicos e Intelectuales (CAI), entre otras, el gobierno tenía clara su misión: entre el doble lenguaje y la confusión, hacer de las mentiras verdades, acabar con toda disidencia, retomar la iniciativa política y la capacidad de crear, conducir y controlar los escenarios políticos. Mientras muchas iniciativas de paz fueron lanzadas por el gobierno federal con eco del estatal, logró acabar con la Mediación, la CONAI, debilitó y ridiculizó a la COCOPA, expulsó a los extranjeros e intentó estrangular toda posibilidad de observación internacional sobre la violación a los derechos humanos que planeadamente se desataría en el año. También se agredió con más fuerza a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y a los indígenas eliminando su posibilidad de sobrevivir cuando se les desplazó, cuando se aumentaron los precios a los productos ya mencionados. Sin embargo, se gastó más en equipo militar y policiaco durante el año.

Entre las cosas más peligrosas que debemos alertarnos en este año, es la osadía con que el gobierno mexicano atentó contra la opinión internacional en 1998 y se atrevió a pasar por el umbral de sus costos políticos y su imagen que no hace mucho cuidaba escrupulosamente. Cuando ya no le importe mucho los instrumentos internacionales, las voces y personalidades prominentes, el diagnóstico de prestigias instituciones de reconocida fama mundial, y mucho menos de cualquier ciudadano expulsado, nos estaremos acercando a las posibilidades de las salidas militares y violentas a la inconformidad popular como los miles de muertos y desplazados en Colombia, Africa y otras naciones del mundo. Así, en este año pasaron por Chiapas personal diplomático, José Saramago (premio Nobel de Literatura), Justo Mullor (Nuncio Apostólico), parlamentarios de diversos países, entre otras personalidades.

En este año, Chiapas fue víctima nuevamente de la maquinaria fraudulenta en las elecciones para las alcaldías y para renovar el Congreso Local, dos instrumentos claves para impulsar para 1999 la estrategia legal del gobierno. Terminada las elecciones, el gobernador interino lanzó las siguientes iniciativas de ley: amnistía a los grupos armados, una propuesta de Derechos y Cultura Indígena, la remunicipalización, por mencionar tres de los ejes fundamentales para controlar el conflicto desde el ámbito

legal. El PRI y el gobierno del estado, recuperaron 16 municipios que estaban gobernados por el PRD en las Zonas Selva, Norte y Altos. Para ello desaforó al presidente municipal perredista de Ixtapa y Jitotol, encarceló a otro de Soyaló; sufrieron intimidaciones y amenazas los candidatos de Bellavista, Villacomaltitlán, Venustiano Carranza, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, etc. También el PAN sufrió hostigamientos y llegó incluso a demandar penalmente al gobernador interino de usar recursos públicos para las campañas del partido oficial. Pese a todo, el fraude se impuso.

En el **ámbito social**, terminamos el año viendo pasar a más de 20 mil desplazados indígenas en Chiapas, a más de 13 mil refugiados guatemaltecos que desean quedarse en el país disputando los derechos y la tierra como todo campesino e indígena pobre y olvidado; vimos aumentar las cárceles de presos zapatistas al tiempo en que salían los paramilitares Chinchulines; vimos crecer la violencia y los grupos paramilitares y armados al tiempo en que se les ofrece la amnistía, vimos miles de muertos por las catástrofes políticas y naturales, vimos derrumbarse miles de viviendas y la esperanza de mejorar la calidad de vida. Pese a ello, las comunidades indígenas y campesinas resistieron la peor embestida.

En el **ámbito militar**, el Ejército Mexicano logra más posiciones en los estados de la República. Salen a la luz nuevas acusaciones de violaciones a los derechos humanos, al grado de que Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIIDH) y otros organismos internacionales de reconocido prestigio, se pronuncian por los hechos de violencia mientras el gobierno los condena y desmiente. Es ahora contra la opinión internacinal que el gobierno tiene que luchar para convencer. En Chiapas aceleran la construcción de guarniciones militares, nuevos campamentos y conjuntos habitacionales en comunidades rurales cuyos recursos los indígenas exigieron durante décadas para la construcción de clínicas e inversión social que hubiera evitado el levantamiento armado.

Por si fuera poco, inusualmente para el país, se dio un acontecimiento insólito en el mes de diciembre que tendrá fuertes consecuencias. Más de 50 miembros del Ejército mexicano, entre soldados, coroneles, tenientes, etc., marcharon por primera vez en las calles de la ciudad de México bajo el nombre de Comando Patriótico de Concientización del Pueblo, para exigir la eliminación del fuero de guerra, pedir la sustitución del Secretario de la Defensa Nacional, exigir la liberación de los presos militares encarcelados injustamente, y acusar al gobierno de implementar una política que empobrece al país, entre otras demandas que escandalizaron a la opinión pública, que hicieron temblar al mismo Ejército y al Poder Ejecutivo. Así, el actor que supuestamente da unidad al Estado-Nación, la herramienta que utiliza el Poder Ejecutivo ahora para controlar e invadir la estructura del Estado y que garantizaría el control del poder ante la disidencia y el descontento de ahora y el que está por venir, el actor que gobierna Chiapas, se resquebraja ante los ojos de los mexicanos. Así, días después, los militares ven aumentar sus sueldos para evitar nuevas escisiones o apoyos a los disidentes castrenses.

Se hace patente una vez más que las fuerzas armadas no son monolíticas, que hay divisiones, y los pone ante los ojos de la opinión pública en una postura de menor credibilidad a la ya acumulada en estos años. Este actor con cada vez más relevancia en el país y en Chiapas, ha sido ya acusado de ser penetrado por el narcotráfico, se le han

destituido generales y elementos por estos hechos que los avergüenzan, se ven señalados por las acusaciones de violaciones a los derechos humanos, involucrados en corrupción y asesinatos, se saben y se sienten ilegales en las tierras chiapanecas lo que les incomoda, y algunos rechazan perseguir la delincuencia del narcotráfico cuando no es su función, pero les acentúan que el poder civil, el poder judicial, no puede controlar el país. Aspectos todos ellos peligrosos para una nación que está viviendo una dolorosa transición democrática con altos costos políticos y sociales. Así, este actor que goza de mucho poder, goza de un fuerte presupuesto, de espacios políticos para que sus miembros contiendan por alcaldías, gubernaturas y escaños en el Congreso de la Unión como diputados y senadores, autonomía e independencia respecto a los poderes judicial y legislativo, de un tabú que gira en torno a no cuestionar a los militares ni su estructura, y de un desconocimiento sobre su vida y dinámica interna por parte de la sociedad en su conjunto. Ningún otro actor en el país goza de tantas prerrogativas. Cabe recordar que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos del gobierno federal, confirma que el 30% del total de las quejas contra el Ejército, provino de los propios militares durante 1998.

La pérdida de credibilidad del proyecto económico, de la política exterior, de las fuerzas armadas, de los incesantes imposiciones de gobernadores interinos en Chiapas sin ver por fin el ejercicio democrático, de los diagnósticos sobre la masacre de Acteal, entre otros elementos, ponen al presente régimen en un dilema muy difícil de cara al 2000. Todavía, para 1999, la lucha por el diagnóstico de la situación del país, del proyecto económico, del conflicto en Chiapas, de la militarización, de la paramilitarización, para ganarse el consenso de la población, girará en torno a las declaraciones del EZLN por un lado, y de la Secretaría de Gobernación-Presidencia-TV Azteca-Televisa-radio difusoras a favor del proyecto-etc., por otro.

En medio de este retroceso social, político, ecológico, económico y democrático para Chiapas, nos preguntamos ¿dónde están los signos de esperanza? En el proyecto económico que sí se está imponiendo porque ya no es fruto del consenso ni del consentimiento de la nación sino del secuestro que han hecho de su destino el PRI y el PAN en el Congreso de la Unión, está su intrínseca destrucción; se están poniendo las bases para una verdadera transición a la democracia y a la justicia que, lamentablemente, costará al país y a los mexicanos todos tanto como lo quiera impedir el partido oficial que se resiste a la transición, al cambio, a dejar el poder. Es cierto, Chiapas y el sureste mexicano no es todo México, pero sí es la puerta por donde el país tiene que pasar y solucionar.

En 1998 el gobierno intentó eliminar a sus adversarios e imponer sus caminos y consensos. No lo logró. No acabó con el EZLN, ni con los extranjeros, no con la Diócesis de San Cristóbal, ni con la resistencia indígena. Sólo se impuso coercitivamente por la vía legal, electoral y militar.

1999: Las preguntas cruciales para el presente año serán: ¿habrán acontecimientos y alianza de ciertos actores, que logren modificar la coyuntura?, ¿que modifiquen la correlación de fuerzas?, ¿que pongan las bases para que sea diferente el país en un futuro muy próximo?

En el presupuesto para 1999, la iniciativa presidencial propone que para el pago de la deuda pública se aumente 43 mil 669.5 millones de pesos, mientras destina 45 mil 742.4

millones para los programas de combate a la pobreza en el país, o sea, 1.8 dólares al año para cada uno de los más de 40 millones de pobres en México. Esta cantidad representa el 35% del costo de la deuda externa e interna en el país (160 mil 855 millones de pesos). Además, se recortará al presupuesto 14 mil 200 millones de pesos. Entre las diferencias más dramáticas están: mientras se recortan 101 millones a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a la Secretaría de Educación Pública (SEP) se le eliminan del presupuesto 183 millones 360 mil y 305 millones 800 mil a la Secretaría de Agricultura y Ganadería; 1,693 millones 820 mil a las reservas del fondo de jubilados del Instituto Mexicano de Seguridad Social en el año en que la ONU lo destinará a las Personas de Edad, y 724 millones 473 mil a la Secretaría de Marina, Recursos Naturales y Pesca, entre otros casos.

Chiapas comienza el año con una economía débil donde más del 80% de sus ingresos provendrán de la federación que en 1999 se prevén nuevos recortes al presupuesto, con pocas expectativas de inversiones, con unas finanzas totalmente subsidiadas por la federación, con más pobreza que trascendió la Zona de Conflicto, la Zona Norte y Selva para invadir la Costa, Centro, Frayleca y Sierra. Por si fuera poco, el gobernador Albores Guillén reduce en su iniciativa de presupuesto las participaciones a 12 municipios, entre ellos Chenalhó, Las Margaritas, Ocosingo, Simojovel, Tila, Sabanilla, etc., que van desde un 17 a 49% respecto a 1998. Por ello, para cualquier escenario que se plantee para 1999, se tiene que hacer sobre la base de una fuerte crisis económica que se irá agudizando hacia el 2000.

En 1999 se cumplen distintos **aniversarios**: 5 años de la firma del TLC y del levantamiento armado del EZLN, se cumplen 5 años de la formación de la CONAI y uno de su desaparición, 2 de la masacre de Acteal, 4 de la formación de la COCOPA y de la Ley para el Diálogo y la Paz en Chiapas, 3 de la suspensión del diálogo, entre otros aniversarios por las que girarán diversas agendas políticas.

Se avecinan acontecimientos importantes. En enero, la cuarta visita del Papa traerá consecuencias y reacomodos en la **Iglesia Católica** en México que podrían repercutir en Chiapas y sus obispos. El Obispo Samuel Ruiz García dejaría en este año su obispado para dejar la Diócesis de San Cristóbal en manos del Obispo Raúl Vera López. El papel de los obispos y la diócesis ha sido crucial y son ahora una de las trincheras más fuertes para la resistencia y la esperanza de los pobres y la denuncia contra el proyecto de muerte que se ejerce en Chiapas, cimentados sólidamente en el III Sínodo Diocesano que culminará en este año, proceso único en el país por sus características y dimensiones. Así, la Diócesis de San Cristóbal no se debilita, sino que se fortalece, medida de ello serán los ataques que le seguirán en el presente año siendo uno de los blancos centrales del gobierno ya que, hoy por hoy, ni los partidos de oposición representan un enemigo a vencer en el Congreso Local y las organizaciones campesinas tampoco están en su mejor momento.

En febrero llegaría el mandatario estadounidense, William Clinton, si sobrevive al juicio político, semanas antes de que el Congreso de los Estados Unidos formule su Certificación a México sobre la lucha antidroga y de la posible aprobación de la Resolución Leahy que demandaría al gobierno mexicano el desarme de los paramilitares, el respeto a los derechos humanos, una solución política al conflicto en Chiapas, entre otros temas difíciles de aceptar para el orgullo soberano de la política exterior del país cuando se trata de "injerencias extranjeras" en materia de derechos

humanos y no así en materia comercial o de inversiones. Sin embargo, el gobierno no podrá evitar la llegada de la señora Robinson, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ni de otros organismos internacionales al país así como de organismos solidarios y humanitarios, como tampoco podrá evitar la discusión sobre la aceptación de la jurisdicción de la OEA en la materia ni la aprobación de su resolución en materia de derechos indígenas. Y en marcha y aceleración estará en el presente año la aprobación del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), el acuerdo comercial con la Unión Europea o bilateralmente con sus miembros eliminando las cláusulas sobre democracia y derechos humanos.

Si a finales de 1998 el gobierno federal pasó el trago amargo de encontrar la salida al FOBAPROA y a la aprobación del presupuesto y a la Ley de Ingresos, con la siempre alianza del PAN, tendrá que sortear en este año los posibles recortes que nuevamente se hagan al presupuesto del país por la volatilidad del precio del petróleo. Ante esto, el gobierno tendrá algunas opciones para asegurar sus ingresos y pagar la deuda externa: castigar más a los evasores fiscales y fortalecer "las gallinas de los huevos de oro", como el Turismo.

Para las fuerzas políticas partidistas del país, 1999 será el cambio de las dirigencias nacionales de sus respectivos partidos políticos y entrarán en la carrera por definir su participación y candidatos a la presidencia de la República en el año 2000, con 4 nuevos partidos que se enfilan a participar en la contienda electoral. Estos tiempos son momentos de fracturas y divisiones al interior de estos institutos políticos, de creación de disidencias, nuevas fuerzas al interior, etc. Los partidos de oposición, a excepción del PAN, perdieron dos batallas en el Congreso de la Unión: el FOBAPROA y el presupuesto para 1999. Es posible que Chiapas pase al silencio en la opinión pública al tiempo en que aumenta la violencia, como ya ha sucedido, o que sea la bandera de campaña de los partidos políticos ofreciendo soluciones para ganar votos.

Para las fuerzas políticas y sociales, incluyendo al EZLN, la Consulta Nacional para el mes de marzo, intentará ser el acontecimiento que ponga las bases para modificar la correlación de fuerzas en el país y así asentar las condiciones para generar nuevos procesos sociales y políticos. La llamada "gran movilización nacional" será el termómetro que marque las posibilidades de que distintos sectores de la sociedad civil se expresen y cuya expresión será el reflejo de quién guarda el consenso y la credibilidad no sólo sobre la situación de los derechos y cultura indígena, sino de los caminos para destrabar el diálogo. Por ello, como el gobierno está consciente de la trascendencia de este proceso y acontecimiento, intentará por todos los caminos de evitar esta expresión de la opinión popular y, paralelamente, anunciar nuevos caminos para la reanudación del diálogo evitando perder el control, la iniciativa y la creación de escenarios políticos en torno al conflicto. Es más, ya se adelantó. Ante las voces, que no son pocas, que exigen reconstruir la Mediación para lograr la reanudación del diálogo, el gobierno federal, para no encontrarse como el presidente de Colombia con los guerrilleros cara a cara, propone una mediación con tres características: 1) que sea nacional (o sea, evitar la injerencia de cualquier organismos extranjero y reavivar la discusión sobre el II Protocolo de los Convenios de Ginebra referentes a conflictos armados internos que el gobierno de México se niega a firmar, lo que es evidente para todos); 2) que sea "lo más profesional posible" (lo 'posible' no es medible); 3) y que no sea "protagónica" (que no tenga autoridad moral y que se pueda controlar, dirían otros).

El gobierno ya se adelantó a formular nuevas alternativas para la paz proponiendo un esquema que da a conocer al personal diplomático y embajadores y no de cara a la Nación, mucho menos a los legisladores de la COCOPA, quienes nuevamente se ven burlados por el poder Ejecutivo. Los rasgos de dicha iniciativa no son sustancialmente distintas a lo que ya se anunció el año pasado, como el caso de la reactivación de las inversiones que sacará de la pobreza a los indígenas y campesinos, entre otros elementos no diferenciables de promesas de campañas políticas. Otros rasgos de lo que sucederá en 1999 ya los podemos ver: la Secretaría de Gobernación pone como punta de lanza el combate a la delincuencia que se traduce en más cuerpos policiacos y presupuesto, por lo que anuncia la creación de la Policía Federal Preventiva que llegará a 5 o 6 mil elementos antes de las elecciones del 2000; a principios de enero se anuncia el arribo de mil 600 militares a Chiapas y se denuncian ya nuevas movilizaciones de paramilitares y hostigamientos en Chenalhó; el "coordinador para el diálogo" por parte del gobierno federal se lanza nuevamente con fuerza contra el EZLN afirmando que su proyecto fracasó, que sus posturas son "ilegales" e "inmorales". ¿De qué lado está la ilegalidad y la inmoralidad de la guerra, la pobreza y la marginación que rebasa ya a los pueblos indígenas?

Así, vemos que hay una crisis del sector hegemónico, con un partido oficial dividido en tres corrientes, con una Cámara de Diputados que ya no controla tan fácilmente. Vivimos también una crisis económica con un incremento de la coerción frente a la falta de consenso y acompañada de una crisis militar que apenas asoma.

El gobierno federal favorecerá los siguientes escenarios: 1) el Congreso de la Unión: desde donde pretenderá no sacar la decisión sobre los Derechos y Cultura Indígena, desde donde controlará el proyecto económico; 2) el Congreso Local de Chiapas: desde donde lanzará diversas iniciativas para acorralar a toda fuerza disidente; 3) la opinión pública con las siguientes características: el doble lenguaje, insistiendo en el mismo discurso lejano de la realidad, diagnosticando toda disidencia como ilegal, antipatriótica e "inmoral", desde el EZLN, hasta la Iglesia, los partidos políticos, grupos de derechos humanos, etc.; 4) militar: acorralando cada vez más al EZLN, favoreciendo la generación de desplazados, la impunidad de los grupos paramilitares y provocando el enfrentamiento en los municipios autónomos zapatistas, donde la principal astilla será en este año el municipio autónomo de Polhó en Chenalhó.

En este sentido, los pronunciamientos del gobernador interino Roberto Albores en los últimos días son elocuentes. Llama a los obispos de San Cristóbal de Las Casas "profetas del desastre" y agradece que Monseñor Felipe Aguirre (obispo de la Diócesis de Tuxtla Gutiérrez) "no promueve el recurso de las armas" y termina afirmando a los obispos que, "el gobierno del estado le apuesta a la vida y no a la muerte, ojalá que ustedes coincidan con nosotros". Al EZLN lo llama "intransigente" al tiempo en que rechazó que su propuesta de "Amnistía para el Desarme de los Grupos Civiles" signifique amnistiar a los paramilitares, porque "no ha habido institución oficial alguna que haya evidenciado la existencia de algún grupo con esas características".